



00012/PJUDICI/IP/2015

Toluca, México
Marzo 03 de 2015

**Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México
y Municipios**

C. Javier Laynez Potisek

P r e s e n t e

El día de la fecha se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Información del Poder Judicial del Estado de México, en la cual, entre otros puntos se sometió a consideración de dicho cuerpo colegiado la clasificación de la información requerida por el C. Javier Laynez Potisek, mediante la solicitud con el número de registro citado al rubro.

En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo Segundo del propio proveído, comunico a Usted la parte conducente del Orden del Día identificada con el numeral 3.1 que a la letra dice:

“Presentación de solicitudes de acceso a la información que requieren acuerdo del Comité

A).- Solicitud de información pública folio número: 00012/PJUDICI/IP/2015, presentada por JAVIER LAYNEZ POTISEK:

Vista la solicitud de mérito a través de la cual se peticiona lo siguiente:

“1.-Nos proporcione copia simple digitalizada de todo el expediente administrativo con que se cuente del Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 2.-Nos proporcione copia simple digitalizada del documento o documentos en los que conste en número de quejas de carácter administrativo con que cuenta el Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, así como una copia simple digitalizada de todas y cada una de las resoluciones (fundadas o infundadas) que recayeron a las mismas. 3.- Proporcione a esta Procuraduría copia del expediente del Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se contengan las notas de mérito o demérito por quejas fundadas, así como de las correcciones o sanciones disciplinarias que les hayan sido impuestas, incluyendo los motivos que las



originaron. 4.-Me proporcione copia de todas y cada una de las resoluciones que han recaído a los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en contra del Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 5.-Informe si el Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante toda su carrera en el poder Judicial del Estado de México, ha expresado excusa o impedimento para conocer o resolver de algún asunto, con motivo de su estrecha amistad con el Licenciado Moisés Roberto Reyes Bermeo, litigante en el Distrito Judicial de su adscripción. 6.- Nos proporcione copia simple digitalizada de la relación que contenga un listado de todos aquellos asuntos en los que el Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante toda su carrera en el poder Judicial del Estado de México, ha expresado excusa o impedimento para conocer o resolver de algún asunto tramitado ante él. 7.-Proporcione copia simple digitalizada del informe o expediente que contenga las demoras, excesos, omisiones y faltas administrativas que en el desempeño de sus funciones hubiere cometido el Lic. David Celaya Guadarrama, actual Juez Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante todo el tiempo en que ha ocupado cargos en el Poder Judicial del Estado de México.” (sic)

B).- Solicitud de información pública folio número: 00013/PJUDICI/IP/2015, presentada por JAVIER LAYNEZ POTISEK:

Vista la solicitud de mérito a través de la cual se peticiona lo siguiente:

“1.-Nos proporcione copia simple digitalizada de todo el expediente administrativo con que se cuente del Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 2.-Nos proporcione copia simple digitalizada del documento o documentos en los que conste en número de quejas de carácter administrativo con que cuenta el Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, así como una copia simple digitalizada de todas y cada una de las resoluciones (fundadas o infundadas) que recayeron a las mismas. 3.- Proporcione a este Procuraduría copia simple digitalizada del expediente del Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se contengan las notas de mérito o demérito por quejas fundadas, así como de las correcciones o sanciones disciplinarias que les hayan sido impuestas, incluyendo los motivos que las originaron. 4.-Me proporcione copia de todas y cada una de las resoluciones que han recaído a los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en contra del Lic. Roberto



Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 5.- Informe si el Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante toda su carrera en el poder Judicial del Estado de México, ha expresado excusa o impedimento para conocer o resolver de algún asunto, con motivo de su estrecha amistad con el Licenciado Moisés Roberto Reyes Bermeo, litigante en el Distrito Judicial de su adscripción. 6.- Proporcione copia simple digitalizada de la relación que contenga un listado de todos aquellos asuntos en los que el Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante toda su carrera en el poder Judicial del Estado de México, ha expresado excusa o impedimento para conocer o resolver de algún asunto tramitado ante él. 7.-Proporcione copia simple digitalizada del informe o expediente que contenga las demoras, excesos, omisiones y faltas administrativas que en el desempeño de sus funciones hubiere cometido el Lic. Roberto Benítez Aguirre, actual Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, durante todo el tiempo en que ha ocupado cargos en el Poder Judicial del Estado de México” (sic)

Antecedentes

1.- Dicha información fue requerida al Director General de Contraloría, quien a través del oficio número 3013300000/074/2015 de fecha diez de febrero de dos mil quince, informó al Titular de la Unidad de Información que respecto a la información identificada con los numerales 1, 3, 5, 6 y 7; dicha Dirección se encuentra imposibilitada para proporcionarla; ello en razón de lo siguiente:

En relación a los numerales 1, 3 y 7, conforme a lo establecido por el artículo 64, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; los expedientes de los servidores públicos que contengan las notas de mérito, o demérito por quejas fundadas, así como de las correcciones o sanciones disciplinarias que les hayan sido impuestas, se integrarán en la Secretaría de la Presidencia (Secretaría General de Acuerdos); por lo que se estimó conveniente solicitar la información en comento a ésta área.

En cuanto a los numerales 5 y 6, según lo señalado por el artículo 1.54, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en los casos de excusa, respecto de los Jueces, corresponde conocer a la Sala de su adscripción y por lo que hace los Secretarios, conoce el titular del órgano jurisdiccional al que estén adscritos.



2.- Finalmente, mediante oficio número 3013300000/099/2015 de fecha veinte de febrero de dos mil quince, el Director General de Contraloría remitió la información identificada con los números 2 y 4 consistente en SIETE archivos electrónicos que contienen la versión pública referente a las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos instaurados al servidor público judicial Licenciado David Guadarrama Celaya; siendo éstos los tramitados bajo los números de expedientes: DCI/D/0195/96, DCI/D/133/97, DCI/D/0016/98, DCI/D/8/2006, DGC/D/0029/2013, DGC/D/0072/2013 y DGC/D/0027/2014; así como UN documento en el que consta el número de quejas de carácter administrativo con que cuenta hasta esa fecha dicho servidor público.

Respecto al servidor público judicial Licenciado Roberto Benítez Aguirre, es preciso mencionar que no se le ha instaurado ningún procedimiento administrativo, derivado de quejas en su contra.

Considerando

Primero.- De una interpretación literal de lo que dispone el artículo 20 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se considera información reservada aquella que se contenga en expedientes formados por quejas, denuncias, inconformidades o responsabilidades administrativas y resarcitorias, en tanto no hayan causado estado; es decir, procedimientos administrativos que se encuentren en trámite.

Segundo.- Del análisis y examen de las documentales con las que se cuenta consistentes en: 1. SIETE archivos electrónicos que contienen la versión pública referente a las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos instaurados al servidor público judicial Licenciado David Guadarrama Celaya; y 2. UN documento en el que consta el número de quejas de carácter administrativo con que cuenta hasta esa fecha dicho servidor público. Además, del informe rendido por el Director General de Contraloría, se advierte que se trata de asuntos concluidos, por lo que al no existir impedimento legal para proporcionarla al solicitante, lo procedente es hacer entrega a éste último de las actuaciones procesales a las que se ha hecho mención, que corresponden justamente a los numerales 2 y 4 de cada una de las peticiones que ahora son atendidas; sin soslayar los demás puntos que en ambas solicitudes se identifican con los numerales 1, 3, 5, 6 y 7; los cuales serán respondidos en el Considerando Décimo.

Tercero.- Como asuntos concluidos, se exceptúan del supuesto de clasificación contenido en la fracción VI del artículo 20 de la Ley de la materia.



Cuarto.- Este mismo criterio ha sido el adoptado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, al hacer prevalecer la obligatoriedad de publicitar las constancias de expedientes que se encuentren concluidos por sentencia que hayan causado estado, o bien, por oposición de parte interesada como es el caso..

Quinto.- A pesar de lo anterior, el criterio señalado, también refiere que la información que se proporcione debe otorgarse en versión pública, es decir, eliminando los datos personales que identifiquen o hagan identificable a quienes en ellos intervienen, pues los referidos datos, sólo pueden ser publicitados por autorización expresa de las partes, por lo tanto, es adecuada la postura de proporcionar las constancias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por esta institución y sean publicadas, en versión pública.

Sexto.- Lo anterior, porque los números de expediente, nombres de las partes, domicilios particulares y todos aquellos de uso personal, son datos considerados como confidenciales; luego entonces, la versión pública debe emitirse previa cancelación que en cada uno de ellos se haga de los datos personales y todos aquellos que se estimen de uso exclusivo de sus titulares, puesto que, con la puesta a disposición de datos de esa naturaleza, se falta a la finalidad de protección de datos personales, por lo que al testar en los documentos, conforme lo marca la normatividad aplicable en la entidad, los datos personales, no se vulnera el derecho de acceso a la información exigido.

Séptimo.- Respecto a la clasificación de datos personales, es pertinente mencionar que, siguiendo el criterio del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios debe entenderse por “Datos Personales”:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable;

...

La protección de la vida privada es un derecho reconocido por diversas disposiciones internacionales de las cuales México forma parte , entre las que se encuentra la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.



En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona, al establecer en su artículo 16 que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por su parte, los artículos 6 y 7 Constitucionales establecen como límite a la manifestación de las ideas y a la libertad de imprenta respectivamente, el ataque a los derechos de un tercero y el respeto a la vida privada. La libertad de expresar o publicar pensamientos encuentra entonces una restricción cuando con ello se afecte a la persona. Asumiendo que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que ésta debe ser protegida, surge el deber del Estado de brindar protección a los datos personales de los ciudadanos.

Ahora bien, el concepto de privacidad ha evolucionado a nivel internacional a partir del uso de las tecnologías de la información, las cuales permiten que la información concerniente a las personas físicas sea tratada, es decir, recabada, utilizada, almacenada y transmitida para diversos fines tanto en el sector público como en el privado, existiendo la posibilidad de generar en ocasiones, amenazas a la privacidad, derivadas de las injerencias arbitrarias o ilegales en dicha esfera de las personas.

Como ya se enunció anteriormente, ante la llegada en la escena internacional de un nuevo actor, la tecnología, diversos ámbitos de la vida privada, pública, económica y social, se han visto beneficiados por las facilidades que ésta ofrece dada la creciente importancia en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos personales.

Pero al mismo tiempo surgen nuevas amenazas a la privacidad, derivadas de las casi ilimitadas posibilidades de intromisión y acopio de informaciones personales sin que el propio interesado esté consciente de que la propia información es manipulada y utilizada de diversa manera y por distintos actores, día con día.

En pleno desarrollo de la era digital, y de una economía basada en el conocimiento ya que la información se traduce en poder, los gobiernos han sido conscientes de que los datos personales, siendo la fuente de las transacciones comerciales, también involucran derechos humanos fundamentales.

Actualmente existe un desarrollo normativo y doctrinal a nivel internacional acerca de un nuevo derecho concebido como derecho a la protección de datos



personales, el cual al menos en la Unión Europea es considerado como un derecho fundamental.

De acuerdo con lo señalado por Agustín Puente Escobar,

...a diferencia de lo acontecido con otros derechos fundamentales cuyo desarrollo se produjo paralelamente en el ámbito de Europa y de los Estados Unidos, el derecho a la protección de datos de carácter personal tiene un origen marcadamente europeo, ya que el desarrollo de los primeros estudios en esta materia y la adopción de las primeras legislaciones de protección de datos tiene lugar en Europa.

Resulta pertinente resaltar que el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia 292/2000, del 30 de noviembre, ha dado luz sobre los alcances del derecho fundamental a la protección de datos personales, estableciendo su carácter autónomo e independiente, cuyo contenido persigue garantizar un poder de control de los individuos respecto de sus datos personales, así como el uso y destino de los mismos, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo.

Como señala José Luis Piñar Mañas,

...de la sentencia del Alto Tribunal se deduce que, a través de la regulación del artículo 1804 de la Constitución Española, el constituyente quiso garantizar un verdadero derecho fundamental a la protección de datos, cuya garantía deberá preservarse frente a cualquier invasión o intromisión ilegítima, merced a un sistema de protección específico e idóneo, marcando las diferencias existentes entre el “habeas data” y el derecho a la intimidad.

Continuando con lo expuesto por Piñar Mañas,

...este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad, con comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización y omisión de determinados comportamientos concretados en la ley.

El concepto de datos personales, de manera genérica, se refiere al conjunto de informaciones sobre una persona física. Como ejemplo están el Convenio 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



de Europa relativa a la protección de datos personales emitida en 1995, la cual define como datos personales: “Toda información sobre una persona física identificada o identificable...”.

Dicha definición ha sido retomada en diversas legislaciones , con adecuaciones, como lo es en el caso de México en el cual la definición contenida en la LAI, además de su parte genérica, añade algunos ejemplos de dicha información, al señalar que se consideran como datos personales a:

La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad.

De manera que el derecho a la protección de datos personales se traduce en el reconocimiento y establecimiento de prerrogativas, principios y procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, de la información concerniente a personas físicas.

Las prerrogativas son el derecho a ser informado de la existencia de bases de datos que contengan su información, a otorgar su consentimiento libre, expreso e informado para la transmisión de dicha información, así como el derecho de oponerse a que sean utilizados y finalmente, a solicitar que se corrijan o cancelen (derecho al olvido) cuando así resulte procedente.

Los principios de protección de datos internacionalmente aceptados varían en cuanto a su denominación y alcances, y en México se han reconocido en la LAI los relativos a licitud, calidad, acceso y corrección de información, seguridad, custodia y cuidado de la información y consentimiento para su transmisión. Estos principios permiten que los datos sean actualizados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines por los que fueron recabados, que se soliciten de manera lícita; que se dé a conocer a la persona qué información suya obra en bases de datos, quién es el responsable de su tratamiento y de qué manera puede ejercer el derecho de acceso y corrección de datos: que a dicha información sólo tenga acceso el titular de los datos a menos que otorgue su consentimiento libre expreso e informado para que otros conozcan su información, y finalmente, que existan medidas de seguridad que garanticen la custodia e integridad de la información.

Los procedimientos deben establecer mecanismos institucionales para poder ejercer los derechos antes descritos, es decir, deben existir las vías y



autoridades (en ocasiones independientes) que garanticen la tutela de la privacidad.

En cuanto a esto la ley en la materia establece lo siguiente:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

XIV. Versión Pública: Documento en el que se elimina, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso;

Octavo.- En conclusión de lo argumentado, proporcionar los datos con los que institucionalmente se cuenta, no entra en contradicción con la idea de que se permita el acceso a los documentos de los que emana la información requerida, pues lo importante de transparentar dicha información es conocer el quehacer institucional.

Noveno.- Consecuentemente, se aprueba la versión pública de las documentales analizadas.

Décimo.- Por cuanto hace a los puntos que en ambas solicitudes se identifican con los numerales 1, 3, 5, 6 y 7; se procede a dar respuesta a éstos en los términos siguientes:

Puntos 1, 3 y 7. Sobre el particular, es preciso mencionar que el Manual de Organización del Consejo de la Judicatura refiere que la Secretaría General de Acuerdos, por conducto de Dirección de Seguimiento de Acuerdos, tiene como función supervisar la integración de documentos en los expedientes personales de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México, para su control y resguardo; con base en lo anterior, se advierte que en los archivos de ésta institución no obran expedientes administrativos de los servidores públicos, por ende, no es posible proporcionar al solicitante la información en los términos requeridos.

Puntos 5 y 6. Al efecto, cabe precisar que el solicitante no aportó los datos de identificación de los expedientes judiciales para generar las condiciones de entrega de la información requerida, como es el caso del número de expediente, el nombre de las partes y el órgano jurisdiccional competente, datos que están contenidos en la fuente oficial de consulta que son los libros índice de cada uno de los juzgados o tribunales, los cuales pueden ser consultados directamente sin que medie petición alguna, por lo tanto, no es posible proporcionar al solicitante la información en los términos requeridos.”.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

Lo que hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e

**Dr. Heriberto Benito López Aguilar
Titular de la Unidad de Información del
Poder Judicial del Estado de México**